



Ya se están utilizando incentivos económicos para proteger lo natural

LAURA GARWIN

Mientras economistas y ecólogos intentan tender puentes entre sus respectivas disciplinas, ya hay indicios de que, fuera del mundo académico, se están utilizando con éxito incentivos económicos para fomentar la protección del entorno natural y de los *servicios* que éste proporciona a la sociedad.

Estos incentivos adoptan muchas formas, desde los dólares de los turistas al mercado de cupos de contaminación. Todos ellos se vuelven más eficaces a medida que los servicios naturales se hacen cada vez más escasos y, por lo tanto, más preciados.

Quizá el ejemplo más representativo de "enriquecerse haciendo el bien" sea el *ecoturismo*, un negocio que puede reportar altos beneficios invirtiendo en la conservación. Por ejemplo, una empresa surafricana llamada ConsCorp (Conservation Corporation) ha acordado con los propietarios de tierras de una localidad devolver varios cientos de miles de hectáreas de tierra cultivable a su estado original y poblar el terreno con animales salvajes.

Proteger las cuencas

También se pueden obtener beneficios económicos cuando la conservación lleva a evitar los costes que, de otra manera, se habrían producido. Por ejemplo, proteger del desarrollo las cuencas acuíferas es una forma relativamente barata de proporcionar agua limpia y abundante a los usuarios que viven río abajo. En estos ejemplos, el conservar un ecosistema tiene un incentivo económico, porque mantiene bienes y servicios con un claro valor de mercado. Estos bienes y servicios tienen la propiedad de la *exclusión*, ya que es posible impedir que la gente los consuma y, por lo tanto, hacer que la gente pague por ese consumo.

Sin embargo, la mayor parte de los servicios que los ecosistemas prestan a los **humanos** no tienen esa propiedad de exclusión, es decir, proporcionan beneficios a gente que quizá no ponga jamás el pie en el ecosistema o que ni siquiera sea consciente de su existencia.

Entre estos servicios se encuentra la prevención de la erosión y de las inundaciones por parte de las zonas cubiertas de vegetación, y el papel de las aves e insectos en el control de las plagas y en la polinización. En el ejemplo más extremo de un beneficio compartido, se puede considerar que la absorción de carbono que proporciona una hectárea de bosque beneficia a todos los **humanos** al compensar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

En estos casos -y en muchos más- no se puede evitar que las personas obtengan los correspondientes beneficios y, por consiguiente, no es fácil

conseguir que paguen por ellos. La solución del economista al problema de la no exclusión consiste en asignar un tipo adecuado de **derechos** de propiedad. Por ejemplo, los **derechos** de propiedad intelectual como patentes y **derechos** de autor- proporcionan protección a diferentes formas de conocimiento que, de otra forma, no tendrían esa posibilidad de exclusión.

En el ámbito del medio ambiente, algunos ejemplos son los **derechos** de pastoreo, y las licencias de pesca . En los últimos años, los políticos se han convencido de que para una máxima eficacia económica, estos **derechos** se deberían hacer *comercializables* adjudicándoles un valor de mercado y creando incentivos para la conservación.

Por ejemplo, el gobierno de EE UU se ha enfrentado a muchos de sus problemas de contaminación del aire mediante cupos de emisiones. El programa de cupos comercializables por emisiones de anhídrido sulfúrico establecido por las enmiendas a la Ley de Aire Puro de 1990 ha tenido un éxito notable.

Este éxito se refleja en el hecho de que se ha superado con creces la reducción de emisiones establecida. En términos de eficacia económica, los modelos de cupos comercializables, en teoría, equivalen a los impuestos sobre la contaminación, el mecanismo preferido por muchos países europeos. Pero sus partidarios dicen que el mecanismo de los cupos limita por arriba la cantidad de contaminación, lo que podría ser más deseable.

En gran medida como resultado de la presión de EE UU, el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático va más allá y no sólo concede cupos comercializables para la emisión de CO₂, sino también cupos que se conceden a los países que logren retener una cantidad equivalente de carbono, por ejemplo, mediante la reforestación. Este modelo podría afectar profundamente a la economía de la conservación forestal, sobre todo porque el protocolo permitiría que los países desarrollados pagasen por la conservación forestal de los países en vías de desarrollo.

Al final, la elección entre la comercialización de cupos y los impuestos recae en la política y en la filosofía, más que en la economía.

El 'reverdecimiento' del PIB

E. M,

Un objetivo que une a casi todas las escuelas de economistas ecológicos es el deseo de desarrollar un nuevo sistema de contabilidad nacional que abarque factores medioambientales actualmente excluidos de las definiciones de Producto Interior Bruto (PIB). Sin embargo, los diferentes grupos tienden a adoptar diferentes formas de abordar esta tarea, que consiste esencialmente en poner precio a los servicios ecológicos y a los recursos naturales. Además, ninguna ha causado todavía un efecto importante en la política imperante.

La valoración convencional del PIB, que se remonta a alrededor de 50 años, se obtiene sumando el total de la demanda final de bienes y servicios producida anualmente por una nación. Aunque se usa de forma generalizada

por muchos economistas, periodistas y políticos como medida de la salud económica de un país, el PIB ha sido muy criticado por grupos de defensores del medio ambiente, apoyados por algunos economistas simpatizantes, que se basan en el hecho de que da una imagen potencialmente engañosa de la salud de una sociedad desde el punto de vista de medioambiental.

Robert Repetto, del Instituto Mundial de Recursos, afirma: "Un país podría agotar sus recursos minerales, talar sus bosques, erosionar sus suelos, contaminar sus acuíferos y matar sus animales salvajes y sus peces hasta que se extingan, pero su PIB no se verá afectado cuando estos bienes desaparezcan".

Erosión y pesca

Repetto es un pionero en asignar un valor monetario a la erosión del suelo, la deforestación, la pérdida de pesca, recursos costeros y las reservas de petróleo en Costa Rica y en Indonesia. Calcula lo que se conoce como *renta económica* de los recursos naturales, lo cual equivale en gran medida a beneficios. Por ejemplo, si un barril de petróleo crudo se puede vender por 10 dólares y cuesta 6 dólares descubrirlo, extraerlo y llevarlo al mercado (incluyendo los rendimientos de capital), la renta económica de cada barril sería de 4 dólares.

En su estudio de 1989 sobre Indonesia llegaba a la conclusión de que el crecimiento del PIB corregido para reflejar la depreciación de la madera, el petróleo y los recursos del suelo era un 3% inferior a la cifra calculada de forma convencional de un 7,1% entre 1971 y 1984.

Economistas ecológicos más radicales como Herman Daly critican la idea de que la salud de un país se pueda medir en términos de cuánto producen sus ciudadanos. Su Índice de Bienestar Económico Sostenible utiliza medidas de producción habituales como punto de partida pero suma el valor del trabajo doméstico no retribuido y después resta el coste del aire, el agua y la contaminación acústica, así como los costes de la disminución de los pantanos, las tierras cultivables, los recursos no renovables, los desplazamientos, la urbanización, los accidentes de tráfico y la publicidad.

Pero pese a todos sus atractivos intelectuales, el índice ha tenido poco éxito entre los políticos. y también ha sido duramente criticado por economistas.

Críticas al informe sobre el valor de la Tierra

L. G,

Uno de los intentos más polémicos de los últimos años de integrar la economía y la ecología se ha plasmado en unos cálculos publicados el año pasado en la revista *Nature* por el ecólogo Robert Costanza, de la Universidad de Maryland, y por 12 coautores más, sobre el valor monetario de los *servicios del ecosistema y el capital natural* del mundo.

La respuesta fue 33 billones de dólares anuales, una cifra que supera el Producto Interior Bruto de todos los países sumados. Aunque recibió una amplia atención informativa por parte de periódicos y revistas, y la cifra de 33 billones ha sido citada por funcionarios gubernamental en discursos públicos, muchos economistas han tachado el trabajo no sólo de equivocado,

sino de engañoso.

Costanza y los demás autores se han mostrado tajantes a la hora de defender la importancia de su contribución. Y, a medida que los vientos se calman, parece que los observadores más interesados creen que un trabajo con graves defectos técnicos puede tener de todas formas un propósito útil al llamar la atención sobre un problema importante.

Los economistas de la corriente dominante no tardaron en protestar. En un número especial de la publicación *Ecological Economics* (5, 1-72; 1998) dedicado a este trabajo, Michael Toman, de Recursos para el Futuro, calificó la cifra de 33 billones de "grave infravaloración del infinito". Un grupo de economistas británicos escribió que los cálculos a escala de bioma "corren el riesgo de ser ridiculizados tanto por los científicos como por los economistas" y calificó la cifra de "imposible de apoyar".

Los economistas se quejaron de que Costanza y los demás autores no habían entendido correctamente lo que estaban haciendo. Nancy Bockstael, de la Universidad de Maryland, afirma: "Cuando se utiliza la definición de valor de un economista, hay que entender para qué se puede utilizar y para qué no".

Para los economistas neoclásicos, el valor se puede medir únicamente en el contexto de un intercambio específico. Desde este punto de vista, es absurdo preguntarse cuál es *el valor* de los servicios de los ecosistemas del mundo. Un economista se preguntaría, "¿el valor para quién?".

Un requisito es que uno puede evaluar únicamente cambios pequeños -o marginales- en las condiciones actuales. Las decisiones en el mundo real son proporcionales: puede que uno tenga que decidir cuánto vale renunciar a una hectárea de playa, pero nunca le pedirán que renuncie a todas las playas del mundo.

Los detractores se quejan de que Costanza y los demás autores se salieron del contexto y se pasaron mucho de la raya.



| [Return](#) |